



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA LOS CURSOS ESCOLARES 2025/2026, 2026/2027 Y 2027/2028 (CÓDIGO: PLURIANUAL-25).

EXP.: A/SER-004368/2025

TÍTULO: TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LOS CURSOS 2025/2026, 2026/2027 Y 2027/2028 (CÓDIGO: PLURIANUAL 25).

ÍNDICE

I.	JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO.	2
II.	OBJETO Y DURACIÓN DEL CONTRATO.....	3
III.	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO	3
IV.	GARANTÍA.....	4
V.	REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL. CLASIFICACIÓN. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES.....	4
VI.	CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.	8
VII.	SUBCONTRATACIÓN.	8
VIII.	TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:.....	9
IX.	PENALIDADES Y CAUSAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL	10
X.	MODIFICACIONES DEL CONTRATO.....	13

I. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO.

De conformidad con lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se exponen a continuación las necesidades que se tratan de satisfacer, así como las características y el importe de las prestaciones objeto del contrato de referencia:

La escolarización obligatoria viene recogida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, concretamente en su artículo 82.2 establece que las Administraciones educativas garantizarán a todos los alumnos un puesto escolar gratuito en su propio municipio o zona de escolarización establecida, lo que en sí ya supone dotar de medios de transporte gratuitos para todos aquellos alumnos que no puedan ser escolarizados en los municipios donde residan o zonas de escolarización que les corresponda.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid, mediante la Orden de la Consejería de Educación 3793/2005, de 21 de julio (BOCM del 3 de agosto), por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha regulado el uso del transporte escolar gratuito, y ha extendido este derecho reconocido en la Ley Orgánica 2/2006 a otros colectivos que también tendrían derecho a disponer de transporte escolar gratuito (Centros de educación especial, obras, peligrosidad, zonas marginales, etc.).

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el artículo 2 de la Orden de la Consejería de Educación 3793/2005, de 21 de julio (BOCM del 3 de agosto), por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Infraestructuras y Servicios promueve el expediente de contratación de referencia cuyo valor estimado asciende a:

VALOR ESTIMADO	
BASE IMPONIBLE	20.799.827,51 €
PRÓRROGA (2 AÑOS)	13.866.551,51 €
MODIFICACIONES 20%	4.159.965,50 €
TOTAL	38.826.344,52 €

De las necesidades detectadas a través de las Direcciones de Área Territorial sobre escolarización obligatoria en municipio diferente al que residen, así como de otras situaciones a las que se ha reconocido el derecho a transporte escolar gratuito, es necesario contratar para los próximos cursos 2025/2026, 2026/2027 y 2027/2028, un total de 171 rutas para el transporte de alumnado escolarizado en centros docentes públicos no universitarios, pertenecientes a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.

Para ejecutar este contrato, esta Consejería no cuenta ni con la flota de autobuses ni con la plantilla de conductores que se precisaría para ello, debiendo recurrirse a la prestación indirecta del servicio mediante la contratación de las correspondientes rutas de transporte escolar con empresas del sector.

II. OBJETO Y DURACIÓN DEL CONTRATO

El **objeto del contrato** es el servicio de transporte regular de uso especial de alumnos escolarizados en centros docentes públicos de todas las Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, para los cursos 2025/2026, 2026/2027 Y 2027/2028.

División en lotes: sí, 171 LOTES.

Número y denominación de los lotes: la denominación del lote será un número secuencial comprendido entre 1 y 171 seguido por el nombre del centro que lo identificará de forma única.

Número de rutas: 171

Contrato de servicios según artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (Número de referencia del CPV 60130000-8. Número del Código NUTS: ES30).

La **duración máxima** del contrato inicial será de tres años. La ejecución del contrato inicial está prevista desde el primer día lectivo del curso escolar 2025/2026 hasta el último día lectivo del curso escolar 2027/2028.

Prórrogas: sí, por dos años.

Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: 5 años.

III. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO

3.1 Valor estimado

El **valor estimado** total del contrato es de **38.826.344,52 €** y para su determinación se ha tenido en cuenta la base imponible total incrementada en un 20% previsto para las modificaciones, más la base imponible de la posible prórroga. El valor estimado de cada lote se especificará en el anexo correspondiente del PCAP.

CÁLCULO VALOR ESTIMADO	
BASE IMPONIBLE	20.799.827,51 €
PRÓRROGA (2 AÑOS)	13.866.551,51 €
MODIFICACIONES 20%	4.159.965,50 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	38.826.344,52 €

3.2. Presupuesto base de licitación.

El **presupuesto base de licitación** del contrato asciende a **22.879.810,26 €** de los que **20.799.827,51 €** representan la base imponible y **2.079.982,75 €** corresponden al IVA (10%). El presupuesto de licitación

de cada lote se especifica en el anexo correspondiente del PCAP. Su desglose por anualidad se muestra en la siguiente tabla:

CÁLCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)			
ANUALIDAD	BASE IMPONIBLE (BI)	IVA (10%)	PBL (BI + IVA)
2025	2.757.988,15 €	275.798,81 €	3.033.786,96 €
2026	6.933.275,75 €	693.327,58 €	7.626.603,33 €
2027	6.933.275,75 €	693.327,58 €	7.626.603,33 €
2028	4.175.287,86 €	417.528,79 €	4.592.816,64 €
TOTAL	20.799.827,51 €	2.079.982,75 €	22.879.810,26 €

El presente contrato está sujeto a regulación armonizada al superar el umbral de 221.000 € establecido en el artículo 22.1.b) de la LCSP.

IV. GARANTÍA

Garantía provisional: se establece la exigencia de garantía provisional del 2% del presupuesto base de licitación de cada uno de los lotes a los que se licite, para asegurar el mantenimiento de las ofertas por parte de los licitadores hasta la perfección del contrato. La exigencia de garantía provisional en este procedimiento se justifica por las características específicas de este contrato de servicios. Se trata de un servicio público esencial que debe estar operativo el primer día del curso escolar 2025/2026, sin margen para demoras o incidencias en el procedimiento de adjudicación. La experiencia en procedimientos similares muestra que, en ausencia de garantía provisional, puede verse aumentada la retirada de ofertas o la incomparecencia de los licitadores requeridos para aportar documentación, obligando al órgano de contratación a retrotraer actuaciones con el consiguiente retraso en la adjudicación que puede comprometer la continuidad del servicio público.

Garantía definitiva: se establece en un 5% del importe de adjudicación (IVA excluido), de cada uno de los lotes, para garantizar la correcta ejecución del contrato y asegurar la imposición de penalidades en caso de incumplimientos.

Plazo de garantía: no procede por la naturaleza del objeto del contrato.

V. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL. CLASIFICACIÓN. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES.

El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente, mediante su clasificación en los contratos de servicios cuyo objeto esté incluido en el Anexo II del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), o bien acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos específicos de solvencia:

A) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Artículo 87.1 a) Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP):

a) *Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el*

contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente (...)”.

Criterios de selección:

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios de los tres últimos ejercicios concluidos (2021, 2022 y 2023, o en su caso 2024).

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del lote correspondiente, (K), calculado de la siguiente forma:

$$K = (P/T) \times 12$$
$$\text{Solvencia económica y financiera} = K \times 1'5$$

*P = Valor estimado de cada lote.

*T = Plazo de duración del contrato calculado en meses.

La acreditación de esta solvencia se exigirá con relación a cada uno de los lotes en los que se divide el expediente (indicados en el Anexo VI del PCAP “relación de lotes a los que licita”). Cuando se proponga la adjudicación de varios lotes al mismo adjudicatario, se exigirá la acreditación de la cuantía acumulada de la solvencia exigida para cada lote.

Para la acreditación del volumen anual de negocios, el licitador o candidato deberá aportar las cuentas anuales de los ejercicios citados, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro y, en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En caso de que un licitador no acreditara la solvencia requerida para todos los lotes indicados en su oferta, solo se tendrá en cuenta su oferta para aquellos lotes en los que sí se acredite, respetando el orden de preferencia de los lotes indicado en el Anexo I del PCAP “proposición económica”. En caso de no indicarse preferencia, se seguirá el orden de numeración de los lotes.

B) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Artículo 90.1 de la LCSP, apartado:

- a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en el curso de los tres últimos años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano

competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Criterios de selección:

Relación firmada por el representante legal del licitador, de trabajos de objeto similar al del presente contrato, efectuados en cada uno de los últimos tres años 2021, 2022 y 2023, (admitiéndose también la relación de los servicios prestados en 2024 siempre que los servicios relacionados ya hubieran finalizado), que incluya importe, fechas y el destinatario público o privado de los mismos. La exigencia de esta solvencia viene justificada por el hecho de que se requerirá su acreditación con relación a cada uno de los lotes a los que se licite, por lo que es necesario asegurar que los adjudicatarios tienen la máxima solvencia a los efectos de asegurar el correcto desempeño de la prestación objeto del contrato.

La **acreditación** de todos los trabajos relacionados deberá realizarse mediante la presentación de certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

El importe total de los servicios certificados, en el año de mayor ejecución dentro de los tres últimos ejercicios disponibles (2021, 2022 y 2023, y en su caso 2024), de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, deberá ser igual o superior al 70 por ciento del valor anual medio de cada lote, que son las indicadas en el Anexo VI del PCAP “relación de lotes a los que licita” y calculadas de la siguiente forma:

$$\text{Solvencia técnica o profesional de cada lote} = K \times 0,7$$

Teniendo en cuenta las características de la prestación objeto del contrato, se considera más adecuado exigir una solvencia acumulada, a fin de garantizar la correcta ejecución del contrato.

CLASIFICACIÓN SUSTITUTORIA

Los anteriores criterios relativos a la solvencia económica y financiera (artículo 87.1.a) de la LCSP) y a la solvencia técnica o profesional (artículo 90.1.a) de la LCSP), podrán ser también acreditados mediante la siguiente clasificación sustitutoria.

- **Grupo:** R
- **Subgrupo:** 1. Transporte de viajeros por carretera
- **Categoría:** al tratarse de un expediente que se adjudica por lotes, la categoría de la clasificación será la correspondiente a cada uno de los lotes a que licita. Cuando se proponga la adjudicación de varios lotes al mismo adjudicatario, se acreditará la clasificación exigida para el valor resultante de la suma de los lotes a los que se licita.

	Categoría	Categoría regulada en Real Decreto 1098/2001 (anterior a la modificación del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto)
Valor anual medio < 150.000	1	A
Valor anual medio ≥ 150.000 y < 300.000	2	B
Valor anual medio ≥ 300.000 y < 600.000	3	C
Valor anual medio ≥ 600.000 y < 1.200.000	4	D
Valor anual medio > 1.200.000	5	D

Esta clasificación se admitirá a efectos de acreditar **sustitutoriamente la solvencia tanto económica financiera como técnica o profesional.**

* COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MEDIOS [PERSONALES] Y/O [MATERIALES]: Sí procede.

Los licitadores deben cumplimentar el apartado correspondiente en el **Anexo III del PCAP**, **comprometiéndose**, en caso de resultar adjudicatario del contrato, a dedicar o adscribir a su ejecución los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución del contrato.

En caso de **ser propuestos como adjudicatarios del contrato**, deberán **acreditar** la efectiva disposición de dichos medios, mediante títulos de propiedad, contratos, acuerdos, preacuerdos suscritos, convenios o cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

Se considerará que **se cuenta con medios personales adecuados y suficientes**, cuando cumplan con las exigencias establecidas en el Artículo 8 del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, relativo al acompañante. El detalle del número de acompañantes por lote viene recogido en el Anexo IX del PCAP.

No se requiere ninguna cualificación laboral específica para el acompañante, ya que, aunque el artículo 8 del Real Decreto 443/2001 establece que, para las rutas referenciadas en el artículo 1 a) del mismo se deba contar con la cualificación laboral necesaria, el detalle de la cualificación a exigir no viene especificado en esta norma ni en ninguna otra que afecte a las condiciones en que deba desarrollarse el servicio de transporte escolar en la Comunidad de Madrid (Orden 3793/2005, de 21 de julio, del Consejero de Educación, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la Consejería de Educación; Decreto 32/2019, de 9 de abril del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid).

Se considerará que **se cuenta con medios materiales adecuados y suficientes** para la ejecución del contrato, cuando se cumplan las exigencias establecidas en el apartado 14 de la Cláusula 14 del presente pliego. El detalle del número de vehículos y características que deben reunir por lote viene recogido en el Anexo IX del PCAP.

VI. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

En relación al artículo 116.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector Público se señala que tendrán la consideración de **condiciones especiales de ejecución** las señaladas a continuación:

- Durante la vigencia del contrato, **los transportistas prestarán el servicio de transporte escolar exclusivamente con los vehículos que hayan sido autorizados** por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, salvo lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) para la sustitución de vehículos en caso de avería, sin perjuicio de la utilización de otros vehículos autorizados en los distintos lotes adjudicados a una misma empresa que en su caso procediera. El incumplimiento de esta condición especial de ejecución del contrato podrá implicar la **imposición de penalidades** de conformidad con el art. 192.1 de la LCSP y con el correspondiente apartado de esta Memoria.
- El contratista deberá **respetar las condiciones laborales previstas en los convenios colectivos que les sean de aplicación**. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de esta obligación ante el órgano de contratación, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. Esta condición especial de ejecución, tiene el carácter de **obligación esencial**, por lo que su incumplimiento dará lugar a la resolución del contrato, de conformidad con lo señalado en el art. 211 f) de la LCSP.

Se **justifican** dichas condiciones especiales de ejecución al estar vinculadas con el objeto del contrato, siendo adecuadas a la naturaleza de la prestación que se pretende contratar.

VII. SUBCONTRATACIÓN.

Está taxativamente prohibida la subcontratación del servicio de transporte, **excepto la subcontratación del servicio de acompañante, que sí está permitida**.

El incumplimiento de la prohibición señalada en este apartado tendrá la consideración de muy grave, siendo causa de imposición de penalidad.

Se justifica dicha prohibición por las especiales medidas de seguridad y vigilancia que deben primar dado el objeto del contrato, siendo este el servicio de transporte escolar para los centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid.

En la cláusula segunda, apartado tercero del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) se establece que, durante la vigencia del contrato, las empresas adjudicatarias prestarán el servicio exclusivamente con los **vehículos que hayan sido autorizados** por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades **para el contrato del que han sido adjudicatarios**, con dos salvedades:

- Cuando se produzca una avería del vehículo, permitiendo al contratista recurrir a prestar temporalmente el servicio de transporte escolar, siempre que se cumpla con el procedimiento establecido para la gestión de dicha incidencia en la **cláusula sexta del PPT**, a fin de evitar distorsiones en la ejecución del contrato.
- Cuando, por otro tipo de incidencia, sea necesaria la utilización de vehículos distintos a los autorizados para ese lote, siempre que se trate de vehículos autorizados en los distintos lotes adjudicados a una misma empresa que en su caso procediera, y estando a lo dispuesto por la **cláusula sexta del PPT**.

Este requerimiento permite a la Administración garantizar el cumplimiento del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, al posibilitar el examen previo de la antigüedad de la flota, características, presencia de elementos de retención, existencia de plataformas elevadoras para alumnos con dificultades motóricas, etc.

En caso de permitir la subcontratación del servicio, la capacidad de garantizar la seguridad de los vehículos –cometido que corresponde a la Administración–, se vería obstaculizada.

VIII. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: urgente.

Justificación de la tramitación: en la contratación objeto de este expediente, concurren las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 119, dado que la celebración del citado contrato responde a la necesidad inaplazable de que al inicio del curso escolar 2025-2026 esté garantizada la prestación del servicio de transporte escolar para los alumnos que tienen derecho al mismo, de acuerdo con la normativa de aplicación, todo ello por razones de interés público educativo. Por lo que, con el fin de garantizar que el presente contrato esté en vigor en dichas fechas se declara de urgencia su tramitación

Procedimiento: abierto.

Justificación del procedimiento: de conformidad con el artículo 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se utiliza el procedimiento abierto para lograr la mayor concurrencia posible de licitadores y, por tanto, la capacidad de elección de la Administración, en salvaguardia del interés público. El presente contrato está **sujeto a regulación armonizada** al superar el umbral de 221.000 € establecido en el artículo 22.1.b) de la LCSP.

Criterios de adjudicación: único criterio: precio, expresado mediante el precio/día (IVA excluido) con dos decimales ofertado por el licitador, sobre el precio base del lote.

Justificación de los criterios de adjudicación: según dispone el artículo 145 y 146.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, previa justificación en el expediente, el contrato se podrá adjudicar sobre la base del precio o coste.

Se justifica en este expediente que el **único criterio de adjudicación sea el del precio**, porque la prestación está perfectamente definida técnicamente, atendiéndose a la mejor relación coste-eficacia sobre la base del precio, dado que los costes del servicio están todos incluidos en los precios vinculados al objeto del contrato, siendo por lo tanto el precio el único factor determinante de la adjudicación.

Criterios y ponderación: el del precio más bajo que resulte del precio/día (IVA excluido) con dos decimales ofertado por el licitador, sobre el precio base del lote: 100%.

Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato.

El licitador, en el momento en que presente su oferta, deberá disponer, a su nombre, de la preceptiva autorización administrativa de transporte público de viajeros (VD), de la autorización de transporte público de viajeros en vehículo taxi (VT) o de la autorización de arrendamiento de vehículo con conductor (VTC).

En caso de que el licitador se presente en forma de Unión Temporal de Empresas (UTE), el requisito anterior se entenderá cumplido cuando lo cumplan las empresas que integran la UTE.

IX. PENALIDADES Y CAUSAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

9.1 Penalidades por cumplimiento defectuoso

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incumplido el contrato por ejecución defectuosa del mismo, la administración podrá imponer las siguientes penalidades diarias por cada uno de los días a los que afecte el incumplimiento, **teniendo en cuenta que, si el incumplimiento no afectase al servicio total de un día completo, estas penalidades se reducirían proporcionalmente.**

La penalidad se aplicará sobre el precio asociado a la ruta sobre la que se ha producido el incumplimiento:

- Incumplimiento leve: 30% del precio de adjudicación (con IVA) /día de la ruta afectada.
- Incumplimiento grave: 50% del precio de adjudicación (con IVA) /día de la ruta afectada.
- Incumplimiento muy grave: 100% del precio de adjudicación (con IVA) /día de la ruta afectada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192.1 de la LCSP, estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato.

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la administración por daños y perjuicios originados por los incumplimientos del contratista, de acuerdo con la regulación contenida en el art. 194.1 de la LCSP.

Se consideran conductas susceptibles de penalidad, por ejecución defectuosa del contrato, las relacionadas a continuación que se clasifican en incumplimientos leves, graves y muy graves

Se consideran incumplimientos leves:

1. La reiteración (al menos 5 veces en el período de un mes natural) de la superación en **15 minutos o más** del tiempo de espera, respecto de la hora fijada por el Director del centro educativo, para la recogida y llegada de los alumnos al centro, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. A estos efectos no se considerará que hay retraso cuando se deba a causas que un contratista diligente no hubiera podido prever; por el contrario, se considerará que se ha producido el retraso recogido en este punto siempre que el servicio de ida o de vuelta se inicie en la primera parada con, al menos, 15 minutos de retraso respecto de la hora prevista.

2. No mantener el vehículo en las condiciones de higiene y limpieza, así como no asegurar el correcto funcionamiento de todos los elementos en el interior del vehículo, en especial los que se encuentran en contacto con los alumnos, tales como ventanillas, asientos, calefacción, etc.
3. La falta de colaboración con la Administración, para la correcta ejecución del contrato y la mejora del servicio. Se entenderá como una falta de colaboración, entre otras, no acceder a las notificaciones electrónicas en el plazo establecido cuando, de la no atención de la notificación, se derivase un perjuicio para la prestación del servicio; no proporcionar la documentación o información requerida en plazo; no atender las instrucciones dadas, etc.

Se consideran incumplimientos graves:

1. La comisión de un sexto y sucesivos incumplimientos especificados en el punto 1 del apartado anterior a lo largo del curso escolar.
2. El incumplimiento de la ruta a seguir, los puntos de origen o destino y las paradas establecidas, así como el calendario, horario y expediciones establecidas para la prestación del servicio, sin la correspondiente autorización o por causas no justificadas.
3. Transporte de alumnado no incluido en la lista de usuarios de la ruta.
4. Transporte de personal ajeno a la ruta contratada siempre que este no haya sido autorizado expresamente por escrito por la Administración.
5. En caso de subcontratación del servicio de acompañante, incumplir la obligación de comunicación por escrito al órgano de contratación o el incumplimiento de la obligación de estar al corriente de pago con el subcontratista.
6. Incumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para los vehículos en la Cláusula Segunda del PPT.
7. Incumplimiento de la prestación del servicio exclusivamente con los vehículos que hayan sido autorizados por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades para el contrato del que han sido adjudicatarios, salvo en caso de avería del vehículo, en cuyo caso se atenderá a lo dispuesto en la Cláusula sexta del PPT.
8. Incumplimiento de los deberes de custodia estipulados en la Cláusula Tercera del PPT, punto 4, apartados (a) a (e). Se exceptúa el apartado (f) de esta calificación, por tener la consideración de obligación de carácter esencial.
9. Incumplimiento del procedimiento establecido para la gestión de incidencias durante la ejecución del contrato, establecido en la Cláusula Sexta del PPT.
10. Incumplimiento del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y materiales suficientes.
11. La comisión de una tercera infracción leve, de las contempladas en los puntos 2 y 3 del apartado anterior, cuando las dos anteriores infracciones hubieran sido objeto de imposición de penalidad.

Se consideran incumplimientos muy graves:

1. Ejercer la actividad de transporte escolar sin haber solicitado y obtenido la autorización administrativa correspondiente.
2. Transportar simultáneamente alumnado perteneciente a dos o más rutas de transporte escolar en un único vehículo, salvo casos excepcionales debidamente justificados y admitidos por la Administración.
3. La no prestación del servicio de forma unilateral durante un día lectivo o más, sin causa justificada.
4. Imprudencia de los conductores efectivamente acreditada por la autoridad competente, pudiendo ser causa de resolución del contrato.
5. La no presentación de la documentación técnica del vehículo autorizado, completa y adecuada a las estipulaciones de los Pliegos, en un plazo de 10 días hábiles tras la baja de otro vehículo que haya superado la antigüedad permitida, según lo establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto 443/2001, y que deba estar incluido como necesario para la realización del contrato según los parámetros de adjudicación del contrato.
6. Incumplimiento de la prohibición de subcontratar.
7. La comisión de una tercera infracción grave cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de penalidad, dentro del mismo curso escolar.

Procedimiento para la imposición de penalidades:

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. Para proceder a la imposición de las penalidades indicadas será necesario que los incumplimientos que pueden dar lugar a las mismas queden certificados por la Dirección de Área Territorial correspondiente.

De este incumplimiento la Dirección de Área Territorial recabará del contratista la información que considere necesaria para conocer las circunstancias del caso concreto y proponer al órgano de contratación, si así lo estima, el inicio del procedimiento de imposición de penalidades. Toda la documentación recabada será trasladada al órgano de contratación. En caso de acordar el inicio del procedimiento de imposición de penalidades, el órgano de contratación abrirá un trámite de audiencia, para que en un plazo de 10 días hábiles el contratista alegue lo que estime oportuno, y posteriormente resolver sobre la imposición de la penalidad.

9.2. Causas de resolución del contrato

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 211 y 212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 de la LCSP.

Causas de resolución

Las causas de resolución del contrato, serán las previstas en la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), artículos 98, 211 y 313, entre las que se encuentran los incumplimientos de las condiciones que tengan carácter de obligación esencial señaladas en los Pliegos.

En lo relativo a la resolución contractual por **desistimiento unilateral por parte de la Administración**, el contratista tendrá derecho a percibir la indemnización que corresponda, según lo estipulado en el artículo 313, apdo. 3 de la LCSP.

La Administración podrá desistir del contrato, total o parcialmente, cuando dejen de cumplirse los requisitos establecidos en la Orden 3793/2005, de 21 de julio, de la Consejería de Educación, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la Consejería de Educación, o cuando se produzca la pérdida de al menos la mitad de los alumnos transportados, ocasionada con motivo de que:

- En la misma localidad o en alguna de las colindantes, se produzca la apertura de un nuevo centro docente.
- Finalicen las obras que justificaron el desplazamiento de los alumnos a otro centro.
- Se redefina por la Administración Educativa la red de centros sostenidos con fondos públicos.
- Se realice una transformación de los niveles, etapas, ciclos o grados de la enseñanza.
- Se produzca desmantelamiento de barrios de tipología especial o núcleos chabolistas.
- Se produzca una disminución sobrevenida de los alumnos escolarizados con necesidad de transporte en la localidad o zona de recorrido de la ruta.

Asimismo, la Administración podrá desistir de las rutas que resulten innecesarias tras un proceso de optimización de servicios.

Procedimiento de resolución: la resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP.

Indemnización por daños y perjuicios: en los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.

X. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

En el caso de que, dentro del periodo de vigencia del contrato varíen las necesidades reales respecto a las estimadas inicialmente se tramitará la correspondiente modificación total o parcial del lote, en los términos previstos en el artículo 203 y siguientes de la LCSP, antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, de conformidad con la Disposición adicional tercera de la referida LCSP.

La modificación será aprobada por el órgano de contratación una vez cumplidos los siguientes trámites: audiencia del contratista, informe de los Servicios Jurídicos y fiscalización por la Intervención.

El alcance y límite de las modificaciones que se realicen, se basarán en los parámetros que se establecen en la **Cláusula 1, apartado 4 del PCAP "Sistema de determinación del presupuesto del contrato"**, a cuyos importes se les aplicará el porcentaje de baja que haya efectuado la empresa adjudicataria.

Causas de modificación:

- a) Variación del **número de alumnos o tipología** de los mismos (alumnos con discapacidad física, psíquica o sensorial), debido al proceso de escolarización de cada curso, por la fusión de varias rutas, o por la creación de un nuevo centro escolar en la localidad de origen de los alumnos transportados, cuando implique un cambio de tramo respecto a los inicialmente contratados.

TRAMOS DE VEHÍCULOS SEGÚN CAPACIDAD (Nº TOTAL DE PLAZAS)
De 10 a 25 plazas
De 26 a 38 plazas
De 39 a 55 plazas
Mayor de 55 plazas

- b) Variación de la **distancia de recorrido** debido al cambio del número de paradas inicialmente programadas en la adjudicación de la ruta, debido al proceso de escolarización de cada curso.
- c) Aumento, **inclusión o exclusión del acompañante** en aquellas rutas en las que se de alguna de las siguientes circunstancias:
1. En los Centros de Educación Infantil y Primaria y Centros de Educación Especial es obligatorio llevar acompañante. Se precisará un segundo acompañante por las circunstancias del alumnado o en el caso de que llevando dos acompañantes haya que quitar el segundo porque ya no se precise.
 2. Cuando en los Institutos de Educación Secundaria haya que incluir o suprimir el acompañante dependiendo de las características del alumnado (alumnos con discapacidad física, psíquica o sensorial)
- d) Modificación del **número de viajes** de la ruta, siendo la regla general de 2 viajes por ruta, pudiendo aumentar o disminuir este número debido a las circunstancias del alumnado o de los centros educativos.
- e) La variación del código de ruta o la denominación del centro educativo.
- f) La variación de la flota de vehículos autorizados por los motivos permitidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Dichas modificaciones serán comunicadas por la Dirección de Área Territorial al adjudicatario.

Cuando se modifique la denominación de una ruta de las adjudicadas, o la flota de vehículos autorizados por los motivos permitidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, será suficiente para dichos cambios la incorporación al expediente de la documentación acreditativa del mismo.

El **alcance y límite** de las modificaciones que se realicen, se basarán en los parámetros que se establecen en la **Cláusula 1, apartado 4 del PCAP "Sistema de determinación del presupuesto del contrato"**, a cuyos importes se les aplicará la variación que proporcionalmente corresponda al precio de adjudicación de la ruta.

El **porcentaje del precio al que como máximo pueden afectar** las modificaciones, en más o en menos, será de un 20% del precio de adjudicación total del contrato.

En ningún caso se considerará modificación contractual:

- La **variación del número de alumnos** cuando a consecuencia de la misma no se produzca un cambio de tramo del vehículo inicialmente contratado. Asimismo, en el caso de **RUTAS ADAPTADAS**, si se produjera variación en el número de alumnos dentro del tramo contratado, el adjudicatario estará obligado a transportar alumnos hasta el número máximo de plazas adaptadas que equivalgan al máximo de plazas convencionales del citado tramo.

El número máximo de alumnos a transportar dependerá del número de plazas del vehículo autorizado que figura en el apartado "S.1." de la ficha técnica del vehículo con las posibles configuraciones de adaptación especificadas en la sección "observaciones" de la misma.

En el caso de **RUTAS ADAPTADAS**, y en defecto de otros parámetros que se deduzcan de la documentación del vehículo, servirán de orientación no exhaustiva las siguientes conversiones:

TRAMOS DE VEHÍCULOS SEGÚN CAPACIDAD (Nº TOTAL DE PLAZAS)	EQUIVALENCIA DE PLAZAS PARA VEHÍCULOS ADAPTADOS
De 10 a 25 plazas	1 PMR* = 3 plazas
De 26 a 38 plazas	1 PMR = 4 plazas
De 39 a 55 plazas	1 PMR = 4 plazas
Mayor de 55 plazas	1 PMR = 4 plazas

*Personas con movilidad reducida

- La **variación de los kilómetros de recorrido** de la ruta objeto del servicio tendrá que superar los siguientes límites mínimos para que se considere modificación y de lugar al correspondiente aumento o disminución del precio:

VARIACIONES DE DISTANCIA CONSIDERADAS COMO MODIFICACIONES	
Rutas de hasta 10 km	Más de 3 km sobre el recorrido contratado inicialmente (al alza o a la baja)
Rutas de >10 km a 25 km	Más de 4 km sobre el recorrido contratado inicialmente (al alza o a la baja)
Rutas de >25 km en adelante	Más de 5 km sobre el recorrido contratado inicialmente (al alza o a la baja)

Madrid, a fecha de la firma

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Firmado digitalmente por: GARCIA RODRIGUEZ IGNACIO
Fecha: 2025.04.21 16:52

Fdo. Ignacio García Rodríguez.